



EN ESTE NÚMERO | *IN THIS ISSUE*

¿Upstream en crisis? Breves reflexiones sobre la situación actual de la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú

Upstream under crisis? Briefly insights on the current situation of hydrocarbon exploration and exploitation in Peru

Tratamiento de las pérdidas de activos fijos y su impacto en la deducción fiscal

Treatment of fixed asset losses and their impact on tax deductions

Más allá del despido: ¿Los empleadores deben implementar procedimientos disciplinarios para otras sanciones?

Beyond Dismissal: Should employers implement disciplinary procedures for other sanctions?

Lo que debes saber sobre libre competencia si participas en concursos públicos

What you need to know about free competition when participating in public tenders



Los servicios ecosistémicos y su relación con el cierre de brechas de infraestructura sostenible

5

DIEGO MORI
Asociado, experto en Infraestructura, APP y OXI



¿Upstream en crisis? Breves reflexiones sobre la situación actual de la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú

10

SEBASTIÁN ORREGO RODRÍGUEZ-CADILLA
Asociado, experto en Minería y Desarrollo Sostenible



COMENTARIO TRIBUTARIO

Tratamiento de las pérdidas de activos fijos y su impacto en la deducción fiscal

13

ERICKA QUISPE BARRANTES
Asociada, experta en Derecho Tributario



COMENTARIO LABORAL

Más allá del despido: ¿Los empleadores deben implementar procedimientos disciplinarios para otras sanciones?

15

DAYANA CALERO SPELUCÍN
Asociada, experta en Derecho Laboral y Seguridad Social



Lo que debes saber sobre libre competencia si participas en concursos públicos

17

JESÚS ESPINOZA
Socio senior, experto en Competencia y Barreras Burocráticas



Gerentes generales sancionados por el Indecopi ¿Cómo reducir la contingencia?

20

ALEX SOSA HUAPAYA
Socio, experto en Publicidad, Consumo y Privacidad



DESDE EL CONGRESO

- * Nueva Ley Agraria.
- * Exonerar peajes a vehículos municipales de emergencia.

23



EL EXPERTO

La autoría e intervención delictiva en el derecho penal económico

25

RICARDO M. LUPERDI GAMBOA
Socio, experto en Derecho Penal. Sede Trujillo



ALERTA MÁXIMA

Obligación de uso de guías de remisión en operaciones de comercio exterior

28



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- * Desayuno ejecutivo
- * Legal 500 Latin America
- * Leaders League Compliance Summit Latam

32



COLUMNAS
— REVISTA LEGAL —
NÚMERO 216

ESTUDIO MUÑIZ
MUÑIZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Alexandra Ojeda

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

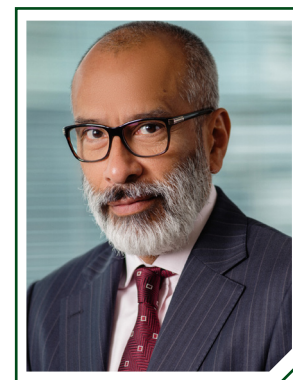
El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-07703

OPENSAC editor.open@gmail.com
IDEAS & SOLUCIONES T. (51) 936 645 459

“Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.”

Ryszard Kapuscinski



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

Que coman pasteles

Aunque es más mito que historia, se le suele atribuir a María Antonieta de Austria, reina de Francia y de Navarra, haber señalado, en el prelude de la Revolución Francesa que, si los pobladores no tenían pan, «que coman pasteles». La desconexión con la realidad no es exclusiva del título rimbombante, pues parece que en el Perú es propia de quien ostente el poder.

Según la encuesta a cargo de Omnicom Media Group recogida por «La República», la mayor preocupación de los ciudadanos es la situación delictiva en el país (61%). La sensación se condice con la realidad, ya que, según las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana analizadas por “Ojo Público”², desde el año 2022 existe un aumento descontrolado de las denuncias por extorsión y homicidio.

La respuesta de la presidenta de la república pone en manifiesto una desconexión de la realidad similar a la de la reina. Esta última le ofrecía -en el mito- pasteles a quienes no tenían ni siquiera pan que comer; y Dina Boluarte ofrece medidas populistas vacías para atacar el hambre provocado por la incesante inseguridad ciudadana y caos social.

Aunque las iniciativas para atacar el gran problema social que atravesamos fueron varias -unas más sorprendentes que otras- vale la pena mencionar dos: la pena de muerte para quienes cometan delitos contra la libertad sexual y la propuesta de creación de un nuevo tipo penal, el «terrorismo urbano». Las «propuestas» son simples: La «invención» o tipificación de nuevas figuras penales y el agravamiento de penas como «política» absolutamente ineficaz para combatir o reprimir el crimen.

Más allá de lo controversial que puede pretender ser la denuncia del Pacto de San José para poder ampliar los alcances de la pena de muerte, ¿para qué nos serviría? Si la intención es reducir la criminalidad, debe «pensarse» erróneamente que la pena de muerte es más «disuasiva». El agravamiento de penas sea en tiempo (más años de pena privativa de libertad) o en modalidades (muerte, castración química, etc.) es una larga discusión ya hace mucho tiempo superada.

Es ilógico considerar que quien delinque piensa, al momento de cometer el delito, en qué es lo que dice el Código Penal respecto a su conducta. Todo delincuente cree que no será descubierto, tiene una sensación de impunidad; cae en cuenta de las consecuencias una vez cometido el delito o descubierta la conducta. Si la intención es desincentivar una conducta, la medida más simplista, menos efectiva, pero más «popular» es la de agravar las penas; pero esa no es ninguna solución real para el problema.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, también hizo uso de su poder de iniciativa legislativa para presentar el Proyecto de Ley 9085/2024-PE, a través del cual proponía la tipificación del «terrorismo urbano». No tipifica una nueva conducta, solo reprime con pena privativa de libertad de treinta años (y cadena perpetua en caso el actor pertenezca a las FFAA o PNP) a quien «genere terror o zozobra en la población» a través de la comisión de delitos ya tipificados (sicariato, conspiración para el delito de sicariato, secuestro y extorsión).

La pregunta es: ¿cómo se acredita la generación de terror o zozobra en la población? La mera tipificación de un delito no asegura su efectividad y es imposible pensar que un artículo más al Código Penal podrá reducir la criminalidad en el país; más aún cuando -por razones probatorias- sería prácticamente imposible de subsumir alguna conducta en él. A las pruebas nos remitimos, la ley que incrementó la pena hasta treinta años de cárcel para quien robe un teléfono celular es hoy por hoy letra muerta, los siguen robando y con mayor incidencia.

No se aprecian medidas ejecutivas a corto y mediano plazo como el despliegue real de operativos de inteligencia de desarticulación criminal; y mucho menos medidas ejecutivas de largo plazo, como apostar por la educación. Solo la educación puede atacar de raíz una crisis institucional y social endémica; un pueblo educado está en posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas, y un pueblo satisfecho tiene, por razones obvias, bajos niveles de criminalidad y grandes índices de estabilidad. Solo se avizoran medidas populistas y superficiales desconectadas del pedido popular de acción efectiva, clamor que pretende ser satisfecho por la presidente y su corte de ministros, con pasteles.)))

¹ La República. Vulnerables temen por igual a la inseguridad y al desempleo. Aaron Ramos, 19 de diciembre de 2024: <https://larepublica.pe/economia/2024/12/19/vulnerables-temen-por-igual-a-la-inseguridad-y-al-desempleo-873056>

² Ojo Público. Inseguridad en las calles del Perú. Abel Cárdenas, 06 de octubre de 2024: https://ojo-publico.com/5320/desborde-extorsiones-y-homicidios-una-policia-precarizada?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApY-7BhBjEiwAQMrrESzYrugnEx7bBFUn5bjWFmZXxj6tUgak8zqef8uA44YnaDeuCAywBoCpkYQAvD_BwE

"When it was discovered that information was a business, truth ceased to matter."

Ryszard Kapuscinski

Let Them Eat Cake

Although it is more myth than history, Marie Antoinette of Austria, Queen of France and Navarre, is often credited with having remarked, in the prelude to the French Revolution, that if the villagers had no bread, "let them eat cake". The disconnection with reality goes beyond royal titles, as in Peru it seems to be a trait of whomever holds power.

According to the survey conducted by Omnicom Media Group, and posted by «La Republica»¹, people's biggest concern is the criminal situation in the country (61%). This feeling is consistent with reality, since, according to figures reported by the Citizen Security Observatory analyzed by "Ojo Público"², since 2022 reports of murder and extortion have skyrocketed in an uncontrolled manner.

The Peruvian President's response reveals a disconnection from reality similar to that of the queen. In the myth, the queen offered cake to the hungry who did not even have bread to eat; and Dina Boluarte offers empty populist measures to tackle down hunger caused by the incessant citizen insecurity and social chaos.

Albeit the initiatives to fight against the huge social problem we are going through are manifold - some more outrageous than others, it is worth mentioning two: the death penalty for sexual offenders, and the proposal to create a new criminal type, "urban terrorism". The "proposals" are simple: The "invention" or definition of a new criminal offenses and the aggravation of penalties as an absolutely ineffective "policy" to combat or repress crime.

As controversial as it may be to denounce the Pact of San José in order to broaden the scope of the death penalty, what good would it do us? If the intention is to reduce criminality, it must be "thought" erroneously that the death penalty is more "dissuasive". More drastic penalties, whether longer, (more years in prison), or in types (death, chemical castration, etc.), is a long discussion that has long since been overcome.

It is illogical to consider that an offender, when committing a crime, is thinking about what the Criminal Code says about their behavior. Every offender believes that they will

not be caught, they has a sense of impunity; they become aware of the consequences afterwards or when they are caught. If the intention is to discourage such behavior, the most simplistic, least effective, but most "popular" measure is to increase penalties; but that is no real solution to the problem.

The President of the Republic, Dina Boluarte, also used her power of legislative initiative to present Bill 9085/2024-PE, through which she proposed the criminalization of "urban terrorism". It does not define a new offense, it only punishes with a 30-year prison sentence (and life imprisonment in case the offender is a member of the Armed Forces or the National Police-PNP) whoever "generates terror or horror in the population" through crimes already defined (hitmen, racketeering for a contract, kidnapping and extortion).

The question is: how can the generation of terror or horror be evidenced in the population? The mere definition of a crime does not ensure its enforcement, and it is impossible to even think that adding one more articles to the Criminal Code can reduce criminality in the country; more over, when considering the burden of the proof, it would be practically impossible to subsume any conduct in it. Let's look at the facts, the law that increased the penalty up to 30 years in prison for offenders who steal a cell phone is now a dead-end, more device are being stolen.

There is no executive measures in the short and medium term, such as real deployment of intelligence operations to dismantle criminal activities; and much less long-term executive measures, such as betting on education. Only education can attack the roots of an endemic institutional and social crisis; educated people can satisfy their basic needs, and satisfied people have, for obvious reasons, low levels of criminality and high stability indexes. We can only see shallow and populist measures, detached from people's claim for effective action, clamor to which the president and her entourage of ministers intended to satisfy with cakes. Only populist and superficial measures are in sight, disconnected from people's claims for effective action, outcry to which the president and her entourage of ministers intended to satisfy with cakes.)))

¹ La Republica. Vulnerable people fear both unsafety and unemployment. Aaron Ramos, December 19, 2024: <https://larepublica.pe/economia/2024/12/19/vulnerables-temen-por-igual-a-la-inseguridad-y-al-desempleo-873056>.

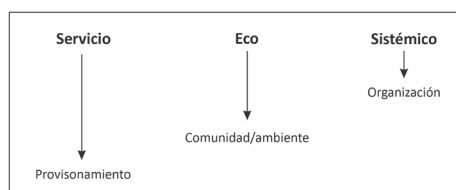
² Ojo Publico. Unsafety in Peruvian streets. Abel Cardenas, October 06, 2024: https://ojo-publico.com/5320/desborde-extorsiones-y-homicidios-una-policia-precarizada?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApY-7BhBjEiwAQMrrESzYrugNEx7blBFUn5bjWFmZXxj6tUgak8zqefBuA44YnaDeuCAyWBoCpkYQAvD_BwE.



LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SU RELACIÓN CON EL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Hablar de Servicios Ecosistémicos (SE) para alguien que no se encuentra familiarizado con aspectos medioambientales puede resultar, en principio, muy confuso; sin embargo, dicha categoría resulta más familiar [y cercana] de lo que uno puede imaginar.

Si dividimos el concepto de “Servicios Ecosistémicos”, nos encontraremos con algo como lo que se muestra a continuación:



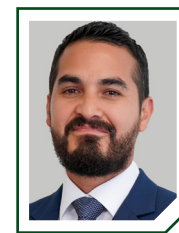
Fuente: Elaboración propia

Efectivamente, hablar de servicios ecosistémicos implica, preliminar y necesariamente, el desarrollo de conceptos tan básicos como medioambiente, biodiversidad y ecosistemas. Precisamente, en esa línea, la biodiversidad contenida en los distintos ecosistemas existentes genera y nos brinda una serie de funcionalidades que, posteriormente, se transforman en lo que el concepto aborda como “servicios”.

Así, en el año 2014, se publicó la Ley No. 30215 – Ley de mecanismos de retribución

por servicios ecosistémicos, en cuyo artículo 3, literal b, define a estos de la siguiente forma:

“Servicios ecosistémicos. Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros, señalados en el reglamento de la presente Ley. Los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación”.

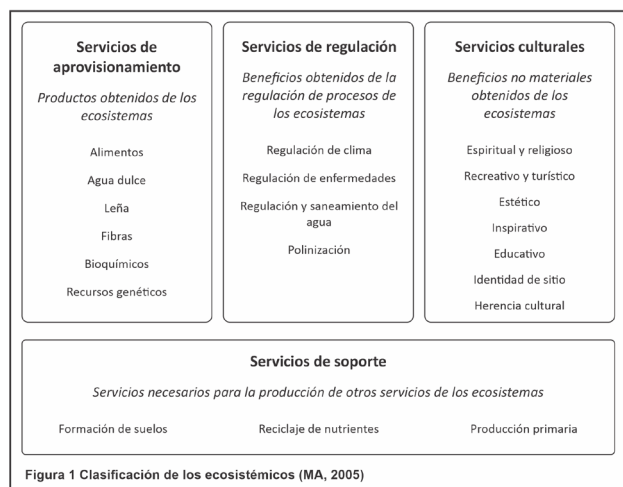


DIEGO MORI

Asociado, experto en Infraestructura, APP y Oxl
Associate, expert in Infrastructure, PPP and Works
for Taxes
dmori@munizlaw.com

Como se aprecia, los servicios ecosistémicos reportan beneficios desde el buen funcionamiento de los ecosistemas. En otros términos, podríamos señalar que se tratan de servicios que, desde la correcta articulación de las funcionalidades que brindan la biodiversidad y los ecosistemas de determinada localidad, generan beneficios económicos, sociales, ambientales, directos e indirectos a las personas ubicadas en dicha localidad.

Ahora bien, la doctrina se ha encargado de desarrollar la diferencia y, por tanto, esgrimir una clasificación de dichos servicios, lo cual surgió en el año 2005 cuando en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (*Millennium Ecosystem Assessment* en inglés), de las Naciones Unidas, se determinó lo siguiente:



Como se aprecia, y volviendo a lo señalado en la primera parte, los SE se tratan de elementos con los que estamos en contacto a diario; no obstante, muchas veces no somos conscientes de los beneficios que nos pueden generar, quedándonos únicamente en el aspecto de "provisionamiento".

No es materia de este corto artículo entrar en el desarrollo de cada uno de estos tipos de servicio, sino mostrar cómo es que el concepto bajo análisis contribuye con el desarrollo de infraestructura sostenible.

El artículo 7 de la Ley señala lo siguiente:

“Artículo 7. Modalidades de los mecanismos de retribución
7.1 Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos pueden adoptar, de común acuerdo entre los contribuyentes y los retribuyentes por el servicio ecosistémico, cualquiera de las siguientes modalidades:

Hablar de servicios ecosistémicos implica, preliminar y necesariamente, el desarrollo de conceptos tan básicos como medioambiente, biodiversidad y ecosistemas. Precisamente, en esa línea, la biodiversidad contenida en los distintos ecosistemas existentes genera y nos brinda una serie de funcionalidades que, posteriormente, se transforman en lo que el concepto aborda como “servicios”.

- a) *Financiamiento de acciones específicas, directas e indirectas, para la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.*
- b) *Financiamiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica sostenibles en beneficio directo de la población involucrada en el mecanismo.*
- c) *Otras modalidades acordadas libremente entre las partes, dentro de los alcances de la presente Ley (...)*”

De modo general, dado que el desarrollo de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos merece un apartado individual, aquellos están referidos a “los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos”¹.

Así, como se aprecia el artículo 7, permite el establecimiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica sostenibles, lo cual graficaremos con un ejemplo:

En el año 2017, mediante Resolución de Consejo Directivo No. 028-2017-SUNASS-CD, se aprobó la Directiva sobre Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos–MRSE Hídricos, siendo uno de sus Anexos la “Guía para el Diagnóstico Hídrico Rápido”, aplicado a empresas prestadoras de Servicios de Saneamiento en el Perú. Esta directiva, tomando en cuenta la clasificación anteriormente esbozada, guarda relación con el servicio ecosistémico de regulación hídrica, el cual se trata de la capacidad del ecosistema de almacenar agua en los períodos de lluvia para luego liberar lentamente durante períodos secos o de estiaje. A mayor capacidad de regulación, entonces mayor será el caudal de regulación o caudales base; asimismo los caudales de crecida serán controlados hasta cierto grado.

Lo que permite la guía, es:

Objetivos de la guía DHR

La presente guía DHR tiene como finalidad orientar el proceso para identificar y priorizar acciones de conservación, restauración y/o uso sostenible de los ecosistemas, como base para la formulación de proyectos a ser incorporados en los Planes Maestro Optimizados de las EPSs.

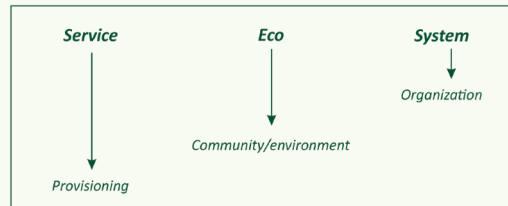
Es decir, desde la identificación de un SE, la normativa permite el desarrollo de infraestructura básica sostenible que, finalmente, revierte en un beneficio para la población en el ámbito de influencia respectivo. Si nos centramos en lo señalado, un Plan Maestro Optimizado (PMO) es una herramienta de planeamiento a largo plazo, con un horizonte de treinta años, que contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa prestadora, lo cual, sin duda, es un beneficio para el cierre de brechas de infraestructura que tanto necesita nuestro país.)))

¹ Contribuyente y Retribuyente son las partes que se vinculan ante el establecimiento de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos.

Ecosystem services and their relationship to closing gaps in sustainable infrastructure

Talking about Ecosystem Services (ES) may be, for someone who is not familiar with environmental issues, very confusing at first; however, this category is more familiar [and closer] than one can imagine.

If we divide the concept of “Ecosystem Services”, we will find something like the following:



Source: Prepared in house

Indeed, ecosystem services imply, first and foremost, and inevitably, the development of basic concepts such as environment, biodiversity and ecosystems. It is precisely in this regard that the biodiversity contained in the different existing ecosystems generates and provides us with a series of functionalities that are subsequently transformed into “services”, as encompassed in the concept.

Thus, in 2014, Act No. 30215 - Act on Compensation Mechanisms for Ecosystem Services was published; its Article 3, paragraph b, defines these services as follows:

“Ecosystem services Those direct and indirect economic, social and environmental benefits that people obtain from the proper functioning of ecosystems, such as water regulation in watersheds, maintenance of biodiversity, carbon sequestration, scenic beauty, soil formation and the provision of genetic resources, among others, as indicated in the regulations of this Act. Ecosystem services are part of the nation’s heritage”.

As we can see, ecosystem services provide benefits from the proper functioning of ecosystems. In other words, we could say that these services generate, from properly articulating the functionalities provided by the biodiversity and ecosystems of a given community, generate direct and indirect economic, social and environmental benefits for the people of said community.

Now, doctrine has developed the difference and, therefore, has set out a classification of said services, which appeared in 2005 when the Millennium Ecosystem Assessment of the United Nations determined the following:

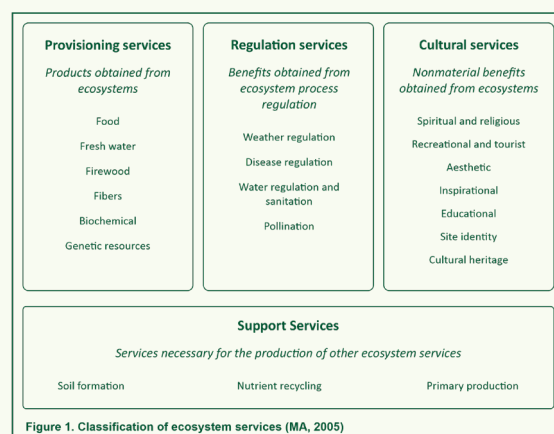


Figure 1. Classification of ecosystem services (MA, 2005)

As we can see, and returning to the statement in the first part, ES are elements with which we are in contact on a daily basis; however, we are often unaware of the benefits they can bring us, considering only the “provisioning” aspect.

This short article is not aimed at developing each of these services, but at showing how the concept under analysis contributes to the development of sustainable infrastructure.

Section 7 of the Act states as follows:

“Article 7. Modalities of the compensation mechanisms

7.1 The compensation mechanisms for ecosystem services may adopt, by mutual agreement between the contributors and the retributive receivers for the ecosystem service, any of the following modalities:

- a) Financing of specific direct and indirect actions towards the preservation, recovery and sustainable use of ecosystem services sources.*
- b) Financing of sustainable productive development actions and basic infrastructure for the direct benefit of the population involved in the mechanism.*
- c) Other modalities freely agreed upon between the parties, within the scope of this Act (...)”*

In general, given that the development of contribution mechanisms for ecosystem services deserves a separate section, these mechanisms refer to “the schemes, tools, instruments and incentives to generate, channel, transfer and invest economic, financial and non-financial resources, where an agreement is established between contributors and retributive receivers to the ecosystem service, aimed at the preservation, recovery and sustainable use of ecosystem services sources”¹.

Thus, as stated in Article 7, it allows for the establishment of sustainable productive development actions and basic infrastructure, which is illustrates below with an example:

In 2017, through Resolution No. 028-2017-SUNASS-CD of the Board of Directors, the Guidelines on Contribution Mechanisms for Water Ecosystem Services - Water ESMRSE was approved, being one of its Annexes the “Guide for Rapid Water Diagnosis”, applied to companies providing Sanitation Services in Peru. These guidelines, taking into account the classification outlined above, are related to the ecosystem service of water regulation, which is the capacity of the ecosystem to store water during rainy periods and then slowly release it during dry or low water periods. The higher the regulation capacity, the higher the regulation flow or base flows, and flood flows will be controlled to a certain degree.

The guide allows the following:

Objectives of the DHR Guidelines

These DHR Guidelines are aimed at guiding the process to identify and prioritize actions towards the preservation, restoration and/or sustainable use of ecosystems, as a basis for the preparation of projects to be included in the Optimized Master Plans of the service providing companies.

In other words, since the identification of an ES, the regulations allow the development of sustainable basic infrastructure that, in the end, benefits the population in the corresponding area of influence. If we focus on the aforementioned, an Optimized Master Plan (OMP) is a long-term planning tool, with a thirty-year horizon, which contains the programming of investments under efficient conditions and the economic and financial projections of the efficient development of the operations of the service providing company. This is, unquestionably, a benefit for closing the infrastructure gaps which our country needs so much.)))

¹ The Contributor and Retributive receiver are the parties linked to a contribution mechanism established for ecosystem services

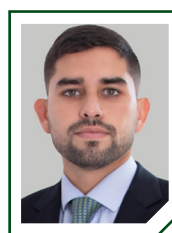


¿UPSTREAM EN CRISIS? BREVES REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL PERÚ

La exploración y explotación de hidrocarburos (*upstream*) en el Perú se encuentra en una situación crítica. En los últimos años, la exploración de hidrocarburos (gas natural y petróleo) se ha reducido progresiva y significativamente, lo cual, a su vez, genera un impacto directo en toda cadena de la industria de los hidrocarburos como la explotación (producción), el transporte, almacenamiento y procesamiento (*midstream*), así como la refinación, comercialización y distribución (*downstream*).

En el mes de marzo de 2024, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Energía y Minas publicó unas estadísticas realmente preocupantes para el sector de hidrocarburos. Precisamente, la OGPP analizó la evolución anual de las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos utilizando como fuente la información actualizada de Perupetro S.A.:

Evolución anual de las inversiones (MM US\$)							
Fase	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exploración	47,3	40,8	57,7	61,1	3,2	2,3	2,3
Explotación	292,6	561,2	562,0	184,6	309,5	323,5	321,7
Total	340,0	601,9	619,7	245,7	312,8	325,8	324,0



SEBASTIÁN ORREGO RODRÍGUEZ-CADILLA

Asociado, experto en Minería y Desarrollo Sostenible
Associate, expert in Mining and Sustainable Development
sorrego@munizlaw.com

Fuente: En Cifras, Revista Estadística – Reporte mensual de Hidrocarburos elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP.

La exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú se encuentra en una situación crítica. En los últimos años, la exploración de hidrocarburos (gas natural y petróleo) se ha reducido progresiva y significativamente, lo cual, a su vez, genera un impacto directo en toda cadena de la industria de los hidrocarburos como la explotación, el transporte, almacenamiento y procesamiento, así como la refinación, comercialización y distribución.

Como se puede apreciar del gráfico expuesto por la OGPP, en los últimos cuatro (4) años, la inversión en exploración de hidrocarburos ha sufrido una caída abismal que pone en peligro la sostenibilidad de la producción de hidrocarburos a nivel nacional a largo plazo, como ha sido reconocido por el Instituto Peruano de Ingenieros de Gas, Petróleo y Energía (IGIPE)¹. Esta caída se sustenta, además, en la reducción existente del número de contratos de exploración petrolera, que actualmente ha caído en su nivel más bajo en 31 años².

Resulta claro que, ante esta situación crítica, la pregunta clave es: ¿cuál es el motivo de esta caída de las inversiones en exploración de hidrocarburos a nivel nacional? Si bien existen múltiples factores involucrados, uno de los principales problemas del sector es el tiempo que demoran las empresas en obtener las autorizaciones regulatorias y ambientales que son necesarias para el inicio de las actividades de exploración de petróleo y gas. Precisamente, en el Perú, el tiempo que demora el proceso para obtener la certificación ambiental de un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos podría superar los diez (10) años³, lo cual, claramente, constituye un desincentivo para las empresas interesadas en ejecutar actividades petroleras en el país.

A modo de ejemplo, se conoce que, en otros países de Latinoamérica y Europa, los permisos medioambientales tienen plazos de tramitación más cortos. En concreto, conforme con la regulación ambiental de países como Chile, México y España, la evaluación de estudios ambientales puede tomar desde 5 meses hasta 2 años⁴, tiempo que se encuentra muy por debajo de lo requerido en el Perú.

Si bien esta situación crítica es conocida y ha sido advertida de manera reiterada por los gremios y asociaciones del sector de hidrocarburos, lo cierto es que, a la fecha, poco o nada se ha hecho desde el sector público para reactivar el mercado *upstream*. Para enfrentar esta crisis, resulta indispensable que el Ministerio de Energía y Minas, en calidad de organismo central y rector del sector de hidrocarburos, disponga las medidas necesarias para optimizar los plazos para la obtención de los permisos regulatorios y ambientales necesarios para la ejecución de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Es importante destacar que, a nivel de gremios y asociaciones involucradas en el sector de hidrocarburos, se vienen discutiendo diversas medidas para reactivar el *upstream* a nivel nacional. En lo que respecta al régimen ambiental, entre las medidas más importantes se pueden destacar las siguientes: (i) la reducción de los plazos de los procedimientos para obtener la certificación ambiental de los proyectos, especialmente, los plazos de evaluación de la denominada "línea base del estudio de impacto ambiental – EIA" para los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos; y, (ii) la implementación de mecanismos alternativos y flexibles de participación ciudadana y de consulta previa en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

En suma, la drástica caída en las inversiones para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos conlleva un gran impacto en la situación actual del sector *upstream*. Esta situación responde a factores endógenos de carácter regulatorio y ambiental como la demora administrativa en la gestión de permisos, por lo cual la reactivación del sector debe promover medidas de *enforcement* que fomenten el cumplimiento de plazos legales por parte de la administración pública, así como medidas de simplificación administrativa que reduzca los plazos para la obtención de permisos.)))

¹ <https://forbes.pe/economia-y-finanzas/2024-10-18/la-falta-de-exploracion-pone-en-peligro-reservas-de-gas-y-petroleo-advier-te-gremio>

² <https://gestion.pe/economia/numero-de-contratos-de-exploracion-petrolera-cae-en-agosto-a-su-nivel-mas-bajo-en-31-anos-noticia/>

³ <https://elcomercio.pe/economia/peru/gas-camisea-minem-busca-reducir-hasta-en-dos-anos-la-tramitologia-ambiental-para-la-exploracion-de-petroleo-y-gas-noticia/>

⁴ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/458778/204787926551686285520191218-19828-7f574g.pdf>

Upstream under crisis? Briefly insights on the current situation of hydrocarbon exploration and exploitation in Peru

Hydrocarbon exploration and exploitation (upstream) in Peru is under critical condition. In recent years, hydrocarbon (natural gas and oil) exploration has been progressively and significantly downsized, leading to a direct impact on the entire hydrocarbon industry chain, such as exploitation (production), transport, storage, and processing (midstream), as well as refinery, trade, and distribution (downstream).

In March 2024, the General Office of Planning and Budget (OGPP, acronym in Spanish) of the Ministry of Energy and Mines, published really alarming statistics for the hydrocarbon sector. The OGPP analyzed the annual evolution of investments on hydrocarbon exploitation and exploration using Perupetro S.A. updated data as the source of information:

Annual Investment Evolution (MM US\$)							
Phase	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exploration	47,3	40,8	57,7	61,1	3,2	2,3	2,3
Exploitation	292,6	561,2	562,0	184,6	309,5	323,5	321,7
Total	340,0	601,9	619,7	245,7	312,8	325,8	324,0

Source: In Figures, Estadística Magazine, Monthly Hydrocarbon Report prepared by the General Office of Planning and Budget (OGPP).

As seen on the graph shown by OGPP, in the last four (4) years, hydrocarbon exploration investment has dropped to rock bottom, endangering hydrocarbon production sustainability nationwide at long-term, as recognized by the Peruvian Institute of Engineers in Gas, Oil and Energy (IGIPE, acronym in Spanish)¹. This fall is moreover supported in the existing reduction of the number of oil exploration agreements, that currently has reached its lowest level in 31 year².

It is blatant that, facing this critical situation, the key question is: which is the cause of this fall in hydrocarbon exploration investments nationwide? Albeit there are manifold factors involved, one of the paramount sector's problem is the delay for granting regulatory and environmental authorizations upon the companies; these are needed for the commencement of gas and oil exploration activities. In Peru, the time span for obtaining an environmental certificate for a hydrocarbon exploration and exploitation project may be more than ten (10) years³, which clearly might lead companies, interested in executing oil activities in the country, to have second thoughts.

For instance, it is known that in other Latin American and European countries, environmental permits are granted in a shorter time. To sum up, as per Chilean, Mexican and Spanish environmental regulation, assessing environmental studies may take from 5 months to 2 years⁴, way shorter than required in Peru.

Although this critical situation is known, and has been warned repeatedly by guilds and partnerships of the hydrocarbon sector, up to date, very little or nothing has been done from the public sector to reactivate the upstream market. To face this crisis, the Ministry of Energy and Mines, as the central and guiding body for the hydrocarbon sector, must produce necessary measures to narrow down spans for getting regulatory and environmental permits necessary for executing hydrocarbon exploitation and exploration activities.

It is important to highlight that, at the guild and partnership level in the hydrocarbon sector, there are discussions over various measures to reactivate the upstream nationwide. Regarding the environmental regime, among the most important measures, the following may be highlighted: (i) shorter terms for obtaining project environmental certifications, especially, assessing terms for the called "baseline of environmental impact assessment - EIA", for hydrocarbon exploration and exploitation projects; and (ii) implementation of alternative and flexible mechanisms of citizenship participation and prior consultations in the environmental impact assessment process.

To sum up, the drastic drop in exploration and exploitation activity investments heads towards a great impact on the current situation of the upstream sector. This situation is explained by endogenous factors of a regulatory and environmental nature such as administrative delays in permit management; therefore, the sector reactivation must promote enforcement measures that foster public administration compliance with legal terms, as well as paperwork reduction measures to shorten the terms for permit granting.)))

¹ <https://forbes.pe/economia-y-finanzas/2024-10-18/la-falta-de-exploracion-pone-en-peligro-reservas-de-gas-y-petroleo-advierde-gremio>

² <https://gestion.pe/economia/numero-de-contratos-de-exploracion-petrolera-cae-en-agosto-a-su-nivel-mas-bajo-en-31-anos-noticia/>

³ <https://elcomercio.pe/economia/peru/gas-camisea-minem-busca-reducir-hasta-en-dos-anos-la-tramitologia-ambiental-para-la-exploracion-de-petroleo-y-gas-noticia/>

⁴ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/458778/204787926551686285520191218-19828-7fs74g.pdf>

Tratamiento de las pérdidas de activos fijos y su impacto en la deducción fiscal



ERICKA QUISPE BARRANTES
Asociada, experta en Derecho Tributario
Associate, expert in Tax
equispeb@munizlaw.com

Empresas de diversos sectores, en especial aquellas que administran activos fijos valiosos como equipos electrónicos, mobiliario o infraestructura, se encuentran expuestas al riesgo de que se cometan delitos en su agravio. Esto sucede, particularmente, en aquellos entornos en los que el acceso es más libre o las medidas de seguridad resultan insuficientes para prevenir actos delictivos.

Siendo así, para acreditar la baja de un activo fijo que no se encuentra en el inventario físico de una empresa, el procedimiento correspondiente es aplicar el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual regula los gastos deducibles para determinar la renta neta. En particular, el literal d) establece que las pérdidas ocasionadas por robo, hurto u otras causas justificadas pueden ser deducidas como gasto si cumplen ciertos requisitos establecidos por la normativa.

Dentro de estos requisitos se señala que debe probarse judicialmente el hecho delictivo o acreditarse que es inútil ejercer la acción judicial correspondiente. En ese sentido, al constatarse el faltante de un activo fijo, siempre que dicha pérdida no esté cubierta por indemnizaciones o seguros, será necesario interponer una denuncia para acreditar, mediante elementos de convicción, la comisión del delito. Asimismo, será necesario acreditar la preexistencia de los bienes con el fin de evidenciar que estos formaban parte de la compañía antes de la ocurrencia del ilícito.

Ahora bien, es relevante señalar que, para que el Ministerio Público formalice y continúe su investigación, la denuncia debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 336° del Código Procesal Penal: (i) indicios de la comisión de un delito, (ii) que la acción penal no haya prescrito, y (iii) la individualización del imputado. Es importante resaltar que este último requisito resulta de difícil cumplimiento, dado que la pérdida del activo fijo se detecta en una fase posterior, durante la realización de los inventarios físicos, sin lograr identificar a los autores del delito. En ese sentido, al imputarse los hechos a personas desconocidas, y no pudiendo ejercer la acción penal, se procede con el archivamiento de la investigación.

La disposición de archivo de la denuncia, que acredita de manera correcta la existencia de elementos de convicción e indicios suficientes para demostrar la consumación del delito, pese a la no individualización de los responsables, justifica la imposibilidad de iniciar la acción judicial. Sin embargo, para efectos tributarios, posibilita la deducción del gasto en la determinación del Impuesto a la Renta, evitando así la obligación del reintegro del crédito fiscal correspondiente a la adquisición de los bienes involucrados.

Finalmente, con esta disposición fiscal, la administración tributaria se asegurará de (i) confirmar que la pérdida no sea ficticia ni derivada de una operación injustificada, sino que provenga de un acto ilícito real con el fin de prevenir abusos que puedan reducir indebidamente la base imponible y, en consecuencia, el monto de impuestos a pagar; y (ii) garantizar la transparencia y legalidad del proceso a través de una validación externa, evitando que se presenten situaciones que puedan poner en riesgo la correcta aplicación de la ley tributaria y el adecuado control de los tributos.)))

Treatment of fixed asset losses and their impact on tax deductions

Companies in various sectors, especially those managing valuable fixed assets such as electronic equipment, furniture, or infrastructure, are exposed to the risk of crime against them. This occurs particularly in those environments where access is more unrestricted or where security measures are insufficient to prevent criminal acts.

Therefore, in order to prove the write-off of a fixed asset that is not included in a company's physical inventory, the corresponding procedure is to apply Section No. 37 of the Income Tax Act, which regulates deductible expenses for determining net income. In particular, paragraph d) states that losses caused by theft, burglary, or other justified reasons may be deducted as expenses if they meet certain requirements set forth by the regulations.

Among these requirements, it is specified that the criminal act must be judicially proven, or it must be demonstrated that pursuing the pertinent legal action would be futile. In this regard, when a fixed asset is found to be missing, and provided that the loss is not covered by compensation or insurance, it will be necessary to file a denunciation to prove, by means of evidence, the commission of the crime. Likewise, it will be necessary to prove the prior existence of the assets to demonstrate that they were part of the company before the occurrence of the unlawful act.

That being said, it is important to point out that, in order for the Attorney General's Office to formalize and continue the investigation, the complaint must meet the requirements set forth in Section No. 336 of the Criminal Procedure Code: (i) indication of the commission of a crime, (ii) that the criminal action has not prescribed, and (iii) the identification of the defendant. It is important to emphasize that this last requirement is difficult to meet, as the loss of the fixed asset is usually detected at a later stage, during the physical inventory process, and it is not possible to identify the perpetrators of the crime. In this regard, when the facts are attributed to unknown individuals, and the criminal action cannot be pursued, the investigation is filed.

The provision to file the complaint, which proves the existence of evidential elements and sufficient indication to demonstrate the commission of the crime, despite the inability to identify those responsible, supports the impossibility of initiating legal action. However, for tax purposes, it allows the deduction of the expense in the determination of income tax, thereby avoiding the obligation to reimburse the tax credit associated with the purchase of the assets involved.

Finally, through this tax provision, the tax administration will ensure: (i) to confirm that the loss is not fictitious or derived from an unjustified transaction, but that it comes from a real illegal act, aiming to prevent abuses that could unduly reduce the taxable base and, consequently, the amount of taxes owed; and (ii) to guarantee the transparency and lawfulness of the process through external validation, preventing situations that could jeopardize the proper application of tax law and the effective oversight of tax obligations.)))

Más allá del despido: ¿Los empleadores deben implementar procedimientos disciplinarios para aplicar otras sanciones?



DAYANA CALERO SPELUCÍN
Asociada, experta en derecho Laboral y
Seguridad Social
Associate, expert in Labor and Social Security Matters
dcalero@munitizaw.com

El contrato de trabajo establece una relación jurídica entre el empleador y el trabajador, en virtud de la que este último se compromete a prestar sus servicios personales de manera diligente, disciplinada y de buena fe, con el objeto principal de dar cumplimiento a los deberes y obligaciones derivados de dicha relación. Estos deberes incluyen ejecutar las funciones derivadas del contrato de trabajo con honestidad, sensatez, veracidad, lealtad y rectitud, debiendo cumplir las indicaciones del empleador dentro del ámbito del contrato.

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a diversas sanciones disciplinarias como amonestaciones verbales, escritas o suspensiones, e, incluso, el despido. En cuanto a éste último, nuestra legislación exige que se lleve a cabo y se materialice solo por causa justa, mediante un procedimiento que observe fundamentalmente el derecho de defensa del trabajador.

Este procedimiento debe iniciarse con la notificación formal de la carta de preaviso que detalle los hechos, precise la base legal y adjunte pruebas que acreditan las imputaciones.

En ese escenario, el trabajador tiene derecho a que se le otorgue un plazo mínimo de 6 días calendario para presentar sus descargos. Cualquier acto del empleador que establezca un plazo menor o distorsione esta garantía vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. Tras recibir los descargos, el empleador debe decidir objetivamente si estos son suficientes para desvirtuar la falta; en caso contrario, el despido procederá con la notificación escrita de la carta de despido.

A pesar de que la legislación laboral no establece un procedimiento específico para sanciones distintas al despido, es fundamental que el trabajador siempre tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa antes de la imposición de cualquier sanción.

Lo dicho se encuentra recogido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y, en el ámbito laboral, constituye la obligación universal de garantizar el derecho del debido procedimiento, del cual emanan los derechos de defensa y de la prueba. Por lo tanto, cualquier restricción al ejercicio de este derecho podría ser objeto de reproche y sanción para el empleador, incluso en casos que no conlleven el despido.

Recientemente, la Sunafil ha ratificado en diversos pronunciamientos que los empleadores deben proporcionar un plazo razonable para que los trabajadores presenten sus descargos ante cualquier imputación, inclusive tratándose de sanciones como la amonestación o suspensión. Es decir, no puede haber sanción disciplinaria sino ha habido un procedimiento previo. Ello tiene como correlato lo establecido en el X Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral.

Por consiguiente, inclusive en los procedimientos en los que la sanción no sería el despido, es esencial que el empleador asegure al trabajador un plazo razonable para que formule sus descargos ante una imputación, garantizando una adecuada defensa.

Por supuesto, si es que no existen elementos suficientes para que la sanción sea eximida, esta deberá ser impuesta por el empleador en virtud de su facultad sancionadora, en atención a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual deberá ser registrado en el legajo del trabajador y constituirá un antecedente disciplinario.)))

Beyond Dismissal: Should employers implement disciplinary procedures for other sanctions?

The employment contract establishes a legal relationship between the employer and the employee, whereby the latter agrees to provide their personal services diligently, with discipline and in good faith. The primary objective is to fulfill the duties and obligations arising from this relationship. These duties include carrying out the tasks outlined in the employment contract with honesty, prudence, truthfulness, loyalty, and integrity, while adhering to the employer's instructions within the scope of the contract.

Noncompliance with these obligations may result in various disciplinary measures, such as verbal or written warnings, suspensions, or even dismissal. Regarding the latter, our legislation requires that it be carried out and executed only for just cause, through a procedure that fundamentally respects the employee's right to defense.

This procedure must begin with the formal notification of a preliminary notice letter explaining the facts, specifying the legal basis, and including evidence supporting the allegations.

In this scenario, the employee has the right to be granted a minimum period of 6 calendar days to present their defense. Any action by the employer that sets a shorter timeframe or distorts this guarantee violates the fundamental rights to due process and defense. Upon receiving the employee's defense, the employer must objectively determine whether it is sufficient to disprove the offense. If not, the dismissal will proceed with the written notification of the dismissal letter.

Although labor legislation does not set out a specific procedure for sanctions other than dismissal, it is essential that the employee always has the opportunity to exercise their right to defense before any sanction is imposed.

What has been stated is outlined in section 3 of article 139 of the Political Constitution of Peru and, in the labor context, it represents the fundamental obligation to ensure the right to due process, which includes the rights to defense and to submit evidence. Therefore, any limitation on the exercise of this right could lead to fault and sanctions against the employer, even in cases where dismissal is not involved.

Recently, the National Superintendency of Labor Inspection (Sunafil) has ratified in several statements that employers must provide a reasonable timeframe for employees to submit their defense against any accusation, even in the case of sanctions such as warnings or suspensions. In other words, no disciplinary action can be taken without a prior procedure. This aligns with what was established in the 10th Supreme Jurisdictional Plenary on labor matters.

Therefore, even in procedures that may not lead to dismissal, it is essential for the employer to make sure the employee has a reasonable timeframe to submit their defense against any accusations, ensuring their proper defense.

Of course, if there are insufficient grounds to dismiss the sanction, it must be imposed by the employer as part of their disciplinary authority, based on criteria of reasonableness and proportionality. This must be recorded in the employee's file and will constitute a disciplinary record.)))

Lo que debes saber sobre libre competencia si participas en concursos públicos

La competencia es un principio de las contrataciones públicas. Los postores compiten entre ellos por ofrecer la propuesta más competitiva que les permite adjudicarse el concurso y poder contratar con el Estado. El Estado obtiene ahorros producto de la competencia entre los postores. Sin embargo, esta competencia puede verse afectada o disminuida por acuerdos secretos entre los postores llamados a competir. Este tipo de acuerdos se vuelven más probables cuando las empresas participan constantemente en licitaciones y no cuentan con programas de cumplimiento.

Los postores podrían repartirse entre ellos las licitaciones en función de diversos criterios (entidades, montos, zonas) y abstenerse de competir en los concursos públicos que no le han sido asignados o presentar ofertas de resguardo o cortesía, es decir, ofertas destinadas a perder y que pretenden simular competencia.

En los últimos años, el Indecopi ha priorizado la investigación de acuerdos anticompetitivos en el ámbito de las contrataciones públicas. Son conocidas las investigaciones emprendidas en la contratación de

servicios de hemodiálisis, oxígeno medicinal, compra de medicamentos, impresión de textos escolares, construcción de carreteras. Estas investigaciones han terminado en sanciones, algunas de las cuales se encuentran siendo discutidas ante el Tribunal del Indecopi o el Poder Judicial.

Las sanciones contra los responsables son drásticas y diversas. En primer lugar, Indecopi sanciona a las empresas con multas cuantiosas calculadas sobre los ingresos que las empresas obtienen por dejar de competir y que pueden llegar hasta el 12% de los ingresos del grupo económico del infractor. En el pasado, el Indecopi ha fijado el tope de las multas sobre los ingresos de la empresa infractora; sin embargo, en recientes casos, la Comisión y el Tribunal del Indecopi ha optado por considerar los ingresos del grupo económico bajo una interpretación literal del artículo 46 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Sin embargo, las multas no solo recaen en las empresas, sino también en los ejecutivos que hayan participado en el planeamiento o ejecución de la conducta. Las multas contra los ejecutivos pueden

llegar hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (S/. 515 000). El Indecopi ha sancionado a directores, gerentes generales, gerentes comerciales, jefes de licitaciones o de compras públicas, analistas comerciales, entre otros cargos.

Las sanciones se han endurecido desde agosto de 2020 con la Ley 31040 con la incorporación del delito de abuso de poder económico al Código Penal, que tipifica como delito los acuerdos anticompetitivos. Una modificación a esta Ley en el 2023 obliga al Indecopi a informar al Ministerio Público de las sanciones que imponga cuando éstas quedan firmes y al Ministerio Público a iniciar investigaciones preparatorias.

A ello se suma la inhabilitación para contratar con el Estado por el plazo de 1 año, recogida en la Ley de Contrataciones Públicas. Las consecuencias no quedan ahí y suelen incluir la orden de implementar programas de cumplimiento monitoreados por el Indecopi, y el riesgo de que la entidad convocante pueda demandar los daños y perjuicios.

Llegado a este punto seguro nos preguntamos ¿cómo el Indecopi descubre estos acuerdos sobre las licitaciones, si por su naturaleza son secretos y los agentes toman precauciones para ser descubiertos? El Indecopi cuenta con diversos medios a su alcance.

Por ejemplo, OSCE le da acceso a información de las contrataciones públicas que le permite identificar patrones anómalos o sospechosos, las mismas empresas o ejecutivos que participan en el acuerdo pueden colaborar con el Indecopi a cambio de una reducción de la multa y de la pena de cárcel. El Indecopi paga recompensas de hasta S/. 400 000 a quien le brinde información valiosa para sus investigaciones, así también accede a los correos electrónicos y teléfonos de los investigados con softwares que recuperan información eliminada.

Conocido los riesgos, es altamente recomendable - sino mandatorio - para las empresas participantes en concursos públicos contar con programas de cumplimiento. Estos programas incluyen protocolos que definen los límites de los ejecutivos que participan en licitaciones, entrenamiento en libre competencia que permite, por ejemplo, identificar cuándo es válido formar un consorcio, y la previsión de canales de denuncia para que los trabajadores reporten cualquier incumplimiento a las políticas

de la empresa. Si no cuentas con un programa de cumplimiento, ahora es un buen momento para que tu empresa lo implemente.)))

La competencia es un principio de las contrataciones públicas. Los postores compiten entre ellos por ofrecer la propuesta más competitiva que les permite adjudicarse el concurso y poder contratar con el Estado. El Estado obtiene ahorros producto de la competencia entre los postores. Sin embargo, esta competencia puede verse afectada o disminuida por acuerdos secretos entre los postores llamados a competir.



JESÚS ESPINOZA

Socio senior, experto en Competencia y Barreras Burocráticas
Senior partner, expert in Competition and Bureaucratic Obstacles
jespinoza@munizlaw.com

What you need to know about free competition when participating in public tenders

Competition is a principle of government procurement. Bidders compete against each other to offer the most competitive bid that allow them to be awarded the contract and be able to contract with the government. The government achieves saving as a result of the competition among bidders. However, this competition can be affected or diminished by secret agreements among the bidders who are supposed to compete. These type of agreements are likely to happen when companies participate constantly in tenders and do not have compliance programs.

Bidders could divide the tenders among themselves based on different criteria, such entities, amounts or zones, and abstain from competing in public tenders that have not been assigned to them, or submit cover or courtesy bids, in other words, bids intended to lose and simulate competition.

In recent years, INDECOPI (National Institute for the Defense of Free Competition and the Protection of Intellectual Property, as its acronym in Spanish) has prioritized the investigation on anticompetitive agreements in the public tender field. The very well-known investigations are related to the procurement of hemodialysis services, medical oxygen, medication purchases, textbook printing, and road construction. Investigations like these have resulted on sanctions, some of which are currently being discussed before the INDECOPI tribunal or the Judiciary.

Sanctions against the responsible people are severe and diverse. First of all, INDECOPI imposes substantial fines on companies, calculated based on the revenue they earn from stopping competition, which can reach up to 12% of the revenue of the infringing economic group. In previous years, INDECOPI has established the limit of fines based on the revenue of the infringing company, however, in recent cases, the Commission and the Tribunal of INDECOPI have opted to consider the revenue of the economic group under a literal interpretation of Article 46 of the Law on the Repression of Anticompetitive Conduct of Peru.

Nevertheless, the fines are not only imposed on companies but also on executives who have participated in the planning or execution of the conduct. The fines against executives can reach up to 100 Tax Units (S/. 515 000 PEN). INDECOPI has sanctioned directors, general managers, commercial managers, head of tenders or public procurement, commercial analysts, among other positions.

Sanctions have been strengthened since August 2020 with Peruvian Law 31040, which incorporated the crime of abuse of economic power into the Peruvian Penal Code, criminalizing anticompetitive agreements. An amendment to this Law in 2023 requires INDECOPI to inform the Attorney General's Office of the sanctions it imposes once they become final, and the Attorney General's Office to initiate preliminary investigations.

Additionally, there is a disqualification from contracting with the government for a period of 1 year, as stipulated in the Public Procurement Law. The consequences do not end there and often include the order to implement compliance programs monitored by INDECOPI, and the risk that the contracting entity may sue for damages.

At this point, we surely wonder, how does INDECOPI discover these agreements on tenders, given their secretive nature and the precautions taken by agents to avoid detection? INDECOPI has various means at its disposal.

For example, OSCE (Supervisory Agency for State Contracts) provides access to information on public procurements that allows INDECOPI to identify anomalous or suspicious patterns. The same companies or executives involved in the agreement can collaborate with INDECOPI in exchange for a reduction in fines and prison sentences, INDECOPI offers rewards of up to S/. 400, 000 PEN to those who provide valuable information for its investigations. It also accesses the emails and phones of those under investigation using software that recovers deleted information.

Given risks, it is highly advisable—if not mandatory—for companies participating in public tenders to have compliance programs. These programs include protocols that defines the limits of executives participating in tenders, training in free competition that allows, for example, identifying when it is valid to form a consortium, and the provision of reporting channels for employees to report any non-compliance with company policies. If you do not have a compliance program now, is the best time to implement one in your company.)))

Gerentes generales sancionados por el Indecopi ¿Cómo reducir la contingencia?

El artículo III del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC) establece que, excepcionalmente y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa.

Sin embargo, en los últimos meses, viene siendo una tendencia que los órganos resolutorios de protección al consumidor imputen a los gerentes generales la presunta infracción del referido artículo por denuncias de parte, sobre todo en denuncias por supuestas cláusulas abusivas en los términos y condiciones (TyC). En estos casos, la autoridad señala que la determinación de la responsabilidad solidaria de un gerente general o personal de dirección en el marco del artículo III del CPDC requiere la concurrencia, en principio, de las siguientes condiciones:

- a) Que un proveedor incurra en una infracción del CPDC;
- b) que la persona involucrada se desempeñe en la dirección, administración o representación del proveedor infractor; y,

- c) que dicha persona participe en el planeamiento, realización o ejecución de la conducta infractora con dolo o culpa inexcusable. Esta participación, según la autoridad, puede realizarse mediante una acción concreta o a través de una omisión, y en ambas se debe analizar si se realizó dicha participación con componente de dolo o culpa inexcusable.

Así, al momento de resolver, la autoridad señala que un gerente general es un personal de dirección de alto nivel dentro de una organización empresarial, por lo que entiende que están dentro de su esfera de control aquellas decisiones y/o prácticas comerciales de mayor envergadura en las que incluye a los TyC, señalando que el gerente general tiene el poder –más allá de si lo ejerce o no– de aprobarlos o rechazarlos (Resolución n° 1723-2023/SPC).

Es importante agregar que, en un caso vinculado al sector inmobiliario (Resolución n° 743-2024/SPC), la autoridad, modificando un criterio anterior, señaló que el gerente general tiene funciones claves como asegurar la correcta administración y ejecución de los actos del objeto social del proveedor que concurre en dicho mercado, tales como construir, entregar la posesión y trasladar de manera oportuna la propiedad de los inmuebles, por lo que la omisión de una de estas funciones constituye una

falta de diligencia que puede contribuir a generar infracciones al CPDC.

Si analizamos de forma amplia los criterios anteriores, el gerente general puede ser considerado responsable por infracción a las normas de protección al consumidor por cualquier acto de la empresa que realice dentro del desarrollo de su actividad económica en el mercado si la autoridad advierte que actuó con dolo o culpa inexcusable, lo cual se reduce a solo el hecho de que no pueda probar que tuvo un nivel de diligencia relevante para garantizar el cumplimiento del CPDC por parte del proveedor infractor.

Independientemente de cuestionar o no esta postura (lo cual no es el objeto del presente artículo), consideramos que, frente a ella, una buena forma de reducir o eliminar la contingencia de sanción al gerente general es contar con los medios probatorios que puedan demostrar que este se involucró diligentemente en el cumplimiento de las normas de protección al consumidor de la empresa.

¿Cómo probar ello? A través del diseño de programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor y publicidad a la interna de la empresa, siguiendo los parámetros establecidos en el numeral 4 del artículo 112 del CPDC y el Decreto Supremo n° 185-2019- PCM (que contiene el reglamento que promueve y regula su implementación), los cuales se concentran en los siguientes componentes:

1. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa. Los programas de cumplimiento deben ser aprobados por el directorio o el órgano de gobierno del proveedor, conforme a su forma de constitución empresarial (ello debe quedar documentado). Por ejemplo, actas de directorio.
2. Que el programa cuente con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de la normativa. Dichos documentos se elaboran sobre la base de los riesgos que enfrenta el proveedor en el sector o actividad en la que opere. Por ejemplo: manual de revisión publicitaria y atención de reclamos si se trata de una empresa retail.
3. Que existan mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el cumplimiento de la normativa. Ejemplo: charlas de

inducción, capacitación, cursos virtuales, etc.

4. Que el programa cuente con mecanismos de monitoreo, auditorías y para el reporte de eventuales incumplimientos.

Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que a través de estos programas se puede evidenciar el compromiso del personal de dirección (gerentes generales) de la empresa en garantizar el cumplimiento de las normas antes mencionadas, con lo cual, desde nuestra perspectiva, se puede contrarrestar la posibilidad de que la autoridad considere que existe responsabilidad del gerente general por culpa inexcusable o dolo por omisión.))



ALEX SOSA HUAPAYA

Socio, experto en Publicidad, Consumo y Privacidad
Partner, expert in Advertising, Consumer Protection and Privacy
 asosa@munizlaw.com

General managers sanctioned by the national institute for the defense of free competition and the protection of intellectual property (Indecopi): How to reduce liability?

Article 111 of the Consumer Protection and Defense Code (CPDC) states that, in exceptional circumstances, and considering the seriousness and nature of the violation, individuals involved in the direction, management or representation of a supplier are joint and several guarantors if they are found to have participated showing willful misconduct or gross negligence to plan, implement or execute the administrative violation.

In recent months, however, it has become increasingly common for consumer protection decision-making bodies to hold general managers accountable under this article, due to private complaints particularly regarding allegedly abusive clauses in terms and conditions (T&C). In such cases, the authorities emphasize that the application of joint and several liability to a general manager or management personnel under Article 111 of the CPDC requires the following conditions to be met:

- a) The supplier commits a violation of the CPDC.
- b) The individual holds a position in the management, administration or representation of the infringing supplier
- c) The individual participates in planning, implementing or executing the infringing conduct with willful misconduct or gross negligence. According to the authority, this participation may occur through a specific action or an omission, and in both cases, it must be analyzed whether the participation involved willful misconduct or gross negligence.

Thus, when issuing a decision, the authority states that a general manager is a high-level management personnel within a business organization, and therefore, major commercial decisions and/or practices, including terms and conditions (TyC), fall within their sphere of control. It emphasizes that the general manager holds the power, whether exercised or not, to approve or reject them. (Resolution No. 1723-2023/SPC)

It is important to add that, in a case related to the real estate sector (Resolution No. 743-2024/SPC), the authority modified a previous criterion and stated that the general manager has key functions, such as ensuring the proper administration and implementation of the actions related to the provider's business objectives in the market, such as building, delivering possession, and timely transfer of property ownership of real estate. Therefore, the omission of any of these functions constitutes a lack of due diligence that could contribute to violations of the CPDC.

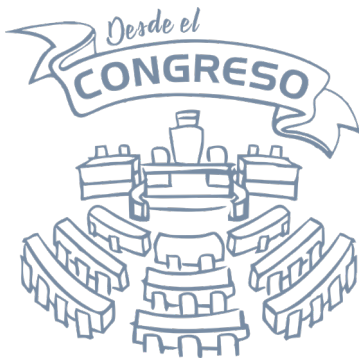
If we broadly analyze the previous criteria, the general manager may be held liable for violating consumer protection laws for any act carried out by the company in the course of its business activity in the market, if the authority finds that the manager showed willful misconduct or gross negligence. This essentially boils down to the fact that the manager cannot prove to have exercised a sufficient level of diligence to ensure the infringing provider's compliance with the CPDC.

Regardless of whether one agrees or disagrees with this stance (which is not the purpose of this article), we believe that, in light of it, a good way to reduce or eliminate the risk of sanctioning the general manager is to have the evidence to demonstrate the manager's diligent involvement in ensuring the company's compliance with consumer protection laws.

How can this be proven? By designing compliance programs on consumer protection and internal advertising within the company, following the guidelines set out in section 4 of Article 112 of the CPDC and Supreme Decree No. 185-2019-PCM (which contains the regulation promoting and regulating its implementation), which focus on the following components:

1. The involvement of and support to the company's top executives in the program. Compliance programs must be approved by the supplier's board of directors or the governing body in accordance with its business structure (this must be properly documented). For example, minutes of the meeting of the board of directors.
2. The program must include a policy and procedures aimed at ensuring compliance with the regulations. These documents are developed based on the risks faced by the supplier in the sector or activity in which the supplier operates. For example: advertising review manuals and complaint handling, if it is a retail company.
3. There must be internal mechanisms for training and educating staff on compliance with the regulations. For example: induction talks, training sessions, online courses, etc.
4. The program must include monitoring mechanisms, audits, and reporting of possible non-compliance.

This hypothesis is based on the fact that these programs can demonstrate the commitment of the company's management personnel (general managers) to ensure compliance with the aforementioned regulations. From our perspective, this can counter the possibility that the authority may consider the general manager liable for gross negligence or willful misconduct by omission.)))



En el cuarto trimestre del 2024 destacaron dos proyectos de ley. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Nueva Ley Agraria¹

Mediante el Proyecto de Ley n.º 8924/2024-CR², se propone aliviar la carga tributaria para las empresas del sector agrícola, siendo la tasa del Impuesto a la Renta (IR) del 15% desde el 2025 hasta el 2035. Del 2036 en adelante, se acoplará a la del régimen general (29.5%).

La propuesta señala que las compañías afectas al IR con tasa del 15% realizarán pagos a cuenta aplicando un 0.8% sobre los ingresos netos devengados en el mes. Además, podrán deducir como gasto o costo los sustentados con boletas de ventas o tickets que no otorguen dicho derecho emitidos solo por contribuyentes del Nuevo Régimen Único Simplificado, hasta un 10% de los montos acreditados en comprobantes.

También se acordó que las empresas agrarias que entre 2025 y 2035 reinviertan sus utilidades tienen derecho a un crédito tributario del 20% de la reinversión ejecutada hasta por el monto de las utilidades netas del IR que correspondan al año en cuestión.

Exonerar peajes a vehículos municipales de emergencia³

El congresista Jorge Flores Ancachi presentó el Proyecto de Ley n.º 9587⁴, que busca la exoneración del pago de peajes para los vehículos de auxilio rápido y atención de emergencias que pertenezcan a las municipalidades distritales y provinciales.

Actualmente, en el Perú, solo los vehículos de la Policía Nacional (PNP), Bomberos y ambulancias, están exonerados del pago de peajes en las carreteras, dado que cumplen las funciones esenciales de emergencia y auxilio a la población.

Según el proyecto, la implementación de esta ley no supondrá una carga significativa para las concesionarias de peaje, ya que el volumen de vehículos de auxilio municipal en comparación con el tráfico general es relativamente bajo.)))

* El Estudio Muñiz presenta bimensualmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ (28 de noviembre de 2024). Nueva Ley Agraria: avanza dictamen que reduce carga tributaria a empresas del sector. Gestión Perú. <https://gestion.pe/economia/nueva-ley-agraria-avanza-en-el-congreso-dictamen-que-reduce-carga-tributaria-a-empresas-del-sector-el-impacto-en-la-recaudacion-comision-agraria-noticia/>

² Proyecto de ley 8924/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjE1MjU3/pdf>

³ (25 de noviembre de 2024). Plantean exonerar del pago de peajes a vehículos municipales de auxilio rápido y emergencias. Gestión Perú. <https://gestion.pe/peru/peajes-plantan-exonerar-a-vehiculos-municipales-de-auxilio-rapido-y-emergencias-serenazgo-noticia/>

⁴ Proyecto de ley 9587/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/9587>



Two bills stood out in the last quarter of 2024. Below, we provide a summary of both legislative initiatives.

New Farm Bill¹

Bill No. 8924/2024-CR² proposes to reduce the tax burden for companies in the agricultural sector by reducing the income tax (IR) rate to 15% from 2025 to 2035. From 2036 onwards, it will be coupled to that of the general regime (29.5%).

The proposal states that companies subject to income tax at a 15% rate will make payments on account by applying 0.8% of the net income accrued during the month. In addition, they may deduct as expenses or costs those supported by sales receipts or tickets that do not grant such right, issued only by taxpayers of the New Simplified Single Regime, up to 10% of the amounts credited in vouchers.

It was also agreed that agricultural companies that reinvest their profits between 2025 and 2035 are entitled to a tax credit of 20% of the reinvestment made, up to the amount of the net income tax profits corresponding to the year in question.

Toll exemption for emergency municipal vehicles³

Congressman Jorge Flores Ancachi presented Bill No. 9587⁴, which seeks to exempt toll payment for rapid assistance and emergency response vehicles belonging to district and provincial municipalities.

Currently, in Peru, only the vehicles of the Peruvian National Police (PNP), Firefighters and ambulances are exempted from paying tolls on highways, since they perform essential emergency and relief functions for the population.

According to the bill, the implementation of this law will not place a significant burden on toll concessionaires, as the volume of municipal relief vehicles compared to general traffic is relatively low.)))

* Estudio Muñiz delivers its clients the legal product "From the Congress" on a bimonthly basis. This is a publication containing a selection of the bills currently in debate in the Congress of the Republic, which can affect the business environment. Columns will include two of several published projects which are still under commissions.

¹ (November 28, 2024). New Farm Bill: opinion to reduce the tax burden on companies in the sector makes progress. Gestión Perú. <https://gestion.pe/economia/nueva-ley-agraria-avanza-en-el-congreso-dictamen-que-reduce-carga-tributaria-a-empresas-del-sector-el-impacto-en-la-recaudacion-comision-agraria-noticia/>

² Proyecto de ley 8924/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjE1MjU3/pdf>

³ (November 25, 2024). The proposal is to exempt municipal emergency and rapid assistance vehicles from paying tolls. Gestión Perú. <https://gestion.pe/peru/peajes-plantean-exonerar-a-vehiculos-municipales-de-auxilio-rapido-y-emergencias-serenazgo-noticia/>

⁴ Proyecto de ley 9587/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/9587>



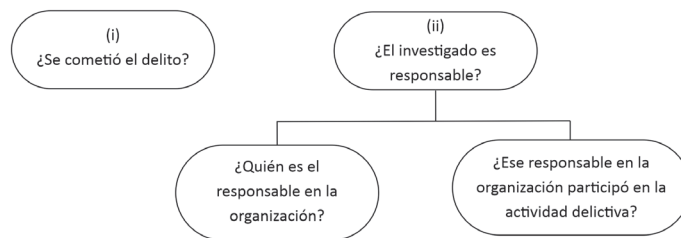
RICARDO M. LUPERDI GAMBOA

Socio, experto en derecho penal. Sede Trujillo
Partner, expert in Criminal Law - Trujillo office
rluperdi@munizlaw.com

La autoría e intervención delictiva en el derecho penal económico

I. Aspectos por determinar en un conflicto jurídico penal:

Dentro de los delitos vinculados al sector empresarial, debemos tener en cuenta que la labor de investigación, ya sea a nivel policial o fiscal, gira en torno a responder las siguientes interrogantes:

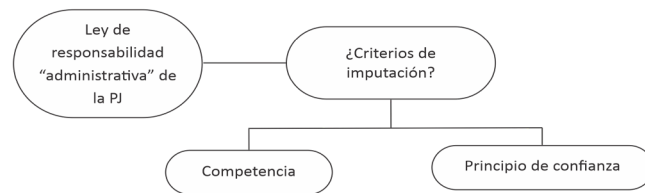


La primera pregunta se define según el caso en concreto y saber si realmente la conducta materia de denuncia o investigación se tipifica dentro de la estructura que el tipo penal contiene en el Código Penal (CP) o Norma Penal Especial (NPE).

La segunda pregunta implica indagar dentro de la Organización Empresarial (OE) quién funcionalmente ejerce el cargo vinculado a la comisión aparente del delito, y luego definir si esa persona (con cargo identificando dentro de la OE) es el responsable de los hechos sometidos a la investigación penal.

II. Consideraciones de imputación en el Derecho Penal Económico:

Dentro de la construcción de la teoría del caso del Ministerio Público (MP) considerará los siguientes aspectos:



Los alcances de la responsabilidad administrativa/penal de la persona jurídica prevista en la Ley n° 30424 y sus diversas modificaciones (NPE), y su vinculación a la Parte General prevista en el CP, se ha desarrollado la implementación del modelo de prevención penal, que ha tenido un reconocimiento a nivel de diversos pronunciamientos de nuestra jurisprudencia penal y que concluyen que el fundamento de la sanción penal de la persona jurídica es por defecto de organización equivalente a la ausencia de un Manual de Prevención idóneo para la organización; por ende, la necesidad de implementar programas de cumplimiento normativo adecuados para la prevención de delitos en el marco empresarial, considerando que las organizaciones empresariales sólo responden por aquello que forma parte de su ámbito de organización.

Para la definición de la responsabilidad penal de los directivos o gerentes dentro de la OE, el MP considera dos criterios de imputación como son: (i) La competencia: que implica determinar las funciones de cada puesto de trabajo dentro de la organización; y, (ii) Principio de confianza: que implica determinar si nos encontramos en una principio de confianza horizontal donde la responsabilidad es autónoma por cada gerente o directivo, y si nos encontramos ante un principio de confianza vertical se debe demostrar el nivel de control que se ha tenido sobre el inferior jerárquico dentro de la OE.

III. Ámbitos de prevención en la configuración de la responsabilidad penal de los representantes de la OE:

Para poder construir toda una estructura preventiva de protección tanto a la OE como a sus representantes, se debe considerar los siguientes ámbitos:

(i) Regulación "autorregulada":

1. **Estructura en la organización:** Contar con un organigrama de la OE en todos los niveles que la conforman, lo que, además, conlleva a una identificación adecuada y documentada de las funciones de cada integrante de la OE.
2. **Definir roles dentro de la OE:** Designar puestos de trabajo o ampliar funciones en puestos de trabajos existentes para el cumplimiento de las exigencias del Modelo de Prevención implementado.

(ii) Documentación de diligencia debida:

1. **Contar con registros documentales:** Se debe generar todo registro documentado para acreditar un comportamiento diligente, tanto a nivel de supervisión del Modelo de Prevención como capacitaciones al personal en situaciones de riesgo laboral, o entrega de los implementos de seguridad correspondientes.

(iii) Título subjetivo del comportamiento:

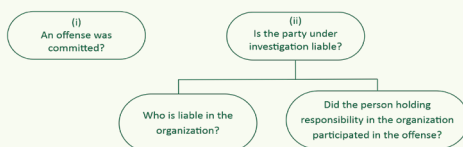
1. **Desacreditar un comportamiento doloso:** De conformidad con el criterio precedente, se puede descartar la existencia del dolo en el comportamiento materia de investigación, previa verificación si dicho comportamiento no contempla una regulación imprudente.

Este esquema de trabajo son lineamientos generales que toda OE puede considerar para prevenir la responsabilidad penal de sus representantes, pero se debe realizar un diagnóstico y una asesoría específica a cada OE según su giro de negocio.)))

Authorship and criminal participation in economic criminal law

I. Aspects to be determined in a criminal legal conflict.

Within the corporate sector related-offenses, we must consider that the investigation, whether conducted by the police or prosecution, focuses on the following questions:

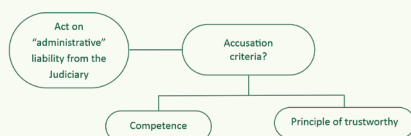


The first question is set according to the concrete case, in order to really know if the behavior subject matter of the offense or under investigation is defined within the structure of the crime definition stated in the Criminal Code (CC) or a Special Criminal Rule (SCR).

The second question implies digging into the Business Organization (BO); who, as per duties, holds the position related to the alleged offense; and then, define if this person (whose position is identified within the BO) is liable for the facts under criminal investigation.

II. Considerations for attributing charges in Economic Criminal Law:

In constructing the case, the Attorney General's Office (MP, acronym in Spanish) shall take into account the following aspects:



The scope of the criminal/administrative liability of the corporation foreseen in Act No. 30424 as amended (SCR), and its relation to the General Part in the CC, has implemented the criminal prevention model, that has been recognized in our legal criminal system through several documents, and which concludes that the basis for criminal sanction of a legal entity is, by an organization default, equal to a lack of a proper Prevention Manual; hence, the need to implement adequate legal compliance programs to prevent corporate offenses, taking into consideration that corporations are liable only within their organization's scope.

In order to single out the criminal liability of the BO's managers or directors, the Attorney General's Office takes into account 2 accusation criteria: (i) Competence: that is, to determine the functions of each position within the organization; and, (ii) Principle of trustworthiness: that is, to determine if it is a horizontal trustworthiness principle wherein the liability is autonomous for each manager or director; and if it is a vertical trustworthiness principle, the degree of control over the understaff in the BO must be proven.

III. Prevention scope in the configuration of criminal liability of BO's agents:

With the aim of constructing a whole preventive structure to shield both the BO and its agents, the following should be considered:

- (i) "Self-regulated" Rules:
 1. **Organization's structure:** To have a BO's organization chart including all levels conforming thereof, which leads to a proper and documented identification of the duties of each BO member.
 2. **Define Roles Within the BO:** Designate job positions or enhance duties for existing job positions for complying with the requirements of the implemented Prevention Model.
- (iii) Due Diligence Documentation:
 1. **Keep documentary records:** Generate all documentary record to certify a diligent behavior, both at the supervision level of the Prevention Model and at staff training in occupational risk situations, or the delivery of the corresponding safety devices.
- (iii) A subjective Appreciation of the Behavior:
 1. **Render null a fraud behavior:** Pursuant to the above criterion, it is possible to disregard a fraud behavior subject matter of investigation if there is confirmation that such behavior is not a reckless regulation.

This working scheme are general guidelines that all BO may consider to prevent the criminal liability of its agents, but a specific counselling and diagnosis must be performed for each BO as per the sector of its business activities.)))

OBLIGACIÓN DE USO DE GUÍAS DE REMISIÓN EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

SE MODIFICA LA NORMATIVA SOBRE GUÍAS DE REMISIÓN RESPECTO A BIENES RELACIONADOS CON OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Ponemos en conocimiento de nuestros clientes que, el 13 de octubre de 2024, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución de Superintendencia Nro. 000240-2024/SUNAT, mediante la cual se modificó la normativa sobre guías de remisión a efectos de mejorar la trazabilidad de los bienes relacionados con operaciones de comercio exterior.

¿Cuál es la finalidad de la norma?

Antes de la referida modificación, el numeral 3.2.9 del inciso 3 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago disponía que, excepcionalmente, no era exigible el uso de la guía de remisión del remitente, ni guía de remisión del transportista, para el traslado de bienes que ingresen al país desde los terminales portuarios del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Ilo y Matarani, hasta los almacenes aduaneros o Zona Primaria con Autorización Especial o hasta cualquier punto del país, siempre que el traslado fuese sustentado con el “ticket de salida” emitido por el administrador portuario.

Por ello, con la finalidad de integrar los procedimientos aduaneros a los tributarios y uniformizar el control del traslado de mercancías a nivel nacional, la norma en comentario modifica las Resoluciones de Superintendencia Nos. 007-99/SUNAT, 188-2010/SUNAT y 097-2012/SUNAT para, entre otras modificaciones, derogar el acápite 3.2.9.2, a efectos de que dicho traslado sea sustentado únicamente con la guía de remisión electrónica.

¿A quiénes les resulta aplicable la norma?

A los contribuyentes que efectúen el traslado de mercancía extranjera en zona primaria.

¿De qué manera los afecta?

Las principales disposiciones de la resolución de superintendencia bajo comentario son las siguientes:

- Se modifica el motivo de traslado de “traslado zona primaria” a “traslado de mercancía extranjera”. Dicha opción corresponde al traslado de mercancías sin destinación aduanera o sin levante, desde el terminal portuario o del terminal de carga aéreo, con circulación por zona secundaria, hacia los almacenes aduaneros o a un local que sea temporalmente considerado zona primaria.
- La norma señalaba que se debía utilizar la guía de remisión remitente en el traslado de bienes considerados en la Ley General de Aduanas como mercancía extranjera desde el puerto o aeropuerto hasta el Almacén Aduanero. Al respecto, se ha adicionado como destino del traslado, además del almacén aduanero, a “un local que sea temporalmente considerado zona primaria”.

- También se modifica el acápite 3.2.9.1 del numeral 3.2.9 del inciso 3 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago para incluir como destino del traslado a “un local que sea temporalmente considerado zona primaria”.
- Dado que se prevé que el terminal portuario de Chancay inicie operaciones en 2024, se incluye este en la excepción prevista en el encabezado del numeral 3.2.9 del inciso 3 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago, respecto al sustento del traslado con ticket de salida.
- Se establecen datos adicionales que deben constar en la guía de remisión remitente, como el número de manifiesto de carga, número de la DAM o DS, el número del documento de transporte, el número del contenedor y del precinto, el indicador de contenedor vacío, entre otros.
- Se dispone la derogación del acápite 3.2.9.1 del numeral 3.2.9 del inciso 3 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago, para que la guía de remisión sea el único documento que sustente dicho traslado, a partir del 30 de junio de 2025.

¿Cuándo entra en vigor la norma?

La presente norma entró en vigor el 14 de noviembre de 2024, con excepción de la Única Disposición Complementaria Derogatoria, referida a la derogación del acápite 3.2.9.1 del numeral 3.2.9 del inciso 3 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago, que entra en vigor el 30 de junio de 2025.

Puede acceder al texto completo del Decreto Supremo en el siguiente enlace:

[Resolución de Superintendencia Nro. 000240-2024/SUNAT](#)

OBLIGATION TO USE WAYBILLS IN FOREIGN TRADE OPERATIONS

THE REGULATIONS ON WAYBILLS ARE AMENDED WITH RESPECT TO GOODS RELATED TO FOREIGN TRADE OPERATIONS

We inform our clients that on October 13, 2024, Superintendence Resolution No. 000240-2024/SUNAT was published in the official gazette *El Peruano*, whereby the regulations on waybills were modified in order to improve the traceability of goods related to foreign trade operations.

What is the purpose of this regulation?

Prior to the aforementioned amendment, number 3.2.9 of subsection 3 of article 21 of the Payment Voucher Regulations provided that, exceptionally, the use of the sender's waybill or the carrier's waybill was not required for the transfer of goods entering the country from the port terminals of Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Ilo and Matarani to the customs warehouses or Primary Zone with Special Authorization or to any point of the country, as long as the transfer was supported by the "exit ticket" issued by the port administrator.

Therefore, in order to integrate customs and tax procedures and standardize the control of the transfer of goods nationwide, the rule in question amends Superintendence Resolutions No. 007-99/SUNAT, 188-2010/SUNAT and 097-2012/SUNAT to, among other amendments, revoke section 3.2.9.2, so that such transfer is supported only by the electronic waybill.

To whom does the rule apply?

To taxpayers who transfer foreign merchandise in the primary zone.

How does it affect them?

The main provisions in the superintendence resolution under review are the following:

- The reason for transfer is modified from "transfer of primary zone" to "transfer of foreign merchandise". This option corresponds to the transfer of goods without customs clearance or without release, from the port terminal or air cargo terminal, with circulation through a secondary zone, to customs warehouses or to a place temporarily considered a primary zone.
- The regulation stated that the waybill should be used in the transfer of goods considered in the General Customs Law as foreign merchandise from the port or airport to the Customs Warehouse. In this regard, in addition to the customs warehouse, "a place that is temporarily considered a primary zone" has been added as the destination of the shipment.
- Also, paragraph 3.2.9.1 of number 3.2.9 of subsection 3 of article 21 of the Proof of Payment Regulations is modified to include "a place that is temporarily considered a primary zone" as the destination of the transfer.
- Since the Chancay port terminal is expected to start operations in 2024, it is included in

the exception provided for in the heading of number 3.2.9 of subsection 3 of Article 21 of the Proof of Payment Regulations regarding the support of the transfer with a customs clearance.

- Additional data that must be included in the sender's waybill, such as the manifest number, DAM or DS number, transport document number, container and seal number, empty container indicator, among others, are established.
- Paragraph 3.2.9.1 of number 3.2.9 of subsection 3 of article 21 of the Proof of Payment Regulations will be revoked as of June 30, 2025, so that the waybill is the only document supporting such transfer.

When does this regulation become effective?

This regulation became effective on November 14, 2024, except for the Sole Complementary Repealing Provision, which refers to the repeal of paragraph 3.2.9.1 of number 3.2.9 of subsection 3 of article 21 of the Proof of Payment Regulations, which will become effective on June 30, 2025.

You can access the full text of the Supreme Decree through the following link:

[Superintendency Resolution No. 000240-2024/SUNAT](#)

Desayuno ejecutivo

El Estudio Muñiz celebró su desayuno ejecutivo exclusivo para clientes. Participaron como expositores Boris Sebastiani, socio senior del área de Derecho Laboral y Seguridad Laboral, quien habló sobre la ley de la salud mental en el trabajo; Luis García, socio senior del área de Derecho Tributario, quien explicó la coyuntura tributaria; y Jesús Espinoza, socio senior del área de Competencia, quien expuso sobre el Indecopi y su importancia para las áreas legales y de RR.HH.)))

Estudio Muñiz held an executive breakfast only for clients. The speakers were Boris Sebastiani, senior partner of the Labor Law and Occupational Safety area, who spoke about the law on mental health at work; Luis García, senior partner of the Tax Law area, who explained the tax situation; and Jesús Espinoza, senior partner of the Competition area, who spoke about Indecopi and its importance for the legal and HR areas.)))



Eventos exclusivos

Nuestro estudio realizó diferentes eventos exclusivos para clientes, donde se abordaron temas como las obligaciones ambientales para la manufactura, la responsabilidad de los gerentes generales ante Indecopi y la regulación publicitaria.)))

Our firm held several exclusive events for clients, addressing topics such as environmental obligations for manufacturing, the responsibility of general managers before Indecopi and advertising regulation.)))

Webinars

Como ya es costumbre, realizamos webinars sobre temáticas de interés como el nuevo régimen del drawback y su impacto en el sector exportador, la Ley General de Contrataciones Públicas y las modificaciones en las guías de remisión electrónicas.)))

As usual, we conducted webinars on topics of interest such as the new drawback regime and its impact on the export sector, the General Law on Public Procurement and the modifications to the electronic waybills.)))

Legal 500 Latin America

Estudio Muñiz es considerado como una de las firmas más destacadas del mercado legal peruano en Corporate & M&A, Tax, Labor & Employment, Bankruptcy & Restructuring, Compliance, Intellectual Property, Banking & Finance, entre otros, por Legal 500.)))

Estudio Muñiz is considered one of the most outstanding firms in the Peruvian legal market in Corporate & M&A, Tax, Labor & Employment, Bankruptcy & Restructuring, Compliance, Intellectual Property, Banking & Finance, among others, by Legal 500.)))

Leaders League Compliance Summit Latam

El Estudio Muñiz auspició el cóctel por el cierre del Leaders League Compliance Summit Latam. Este evento fue organizado por la publicación francesa Leaders League, al que asistieron gerentes de compliance de diferentes empresas de la región.)))

Estudio Muñiz hosted the cocktail party for the closing of the Leaders League Compliance Summit Latam. This event was organized by the French Publication Leaders League and was attended by compliance managers from different companies in the region.)))



Caminata Benéfica

El Comité de Responsabilidad Social y Ambiental de nuestra firma organizó la caminata benéfica "Juntos por sola una meta 2024", con el fin de recaudar fondos para apoyar a la Fundación Debra Perú, organización que ayuda a los niños con epidermolísis bullosa o piel mariposa.)))

The Social and Environmental Responsibility Committee of our firm organized the charity walk "Juntos por sola una meta 2024" (Together for a single goal 2024), in order to raise funds to support the Debra Peru Foundation, an organization that helps children with epidermolysis bullosa or butterfly skin.)))

Feria del Trabajo de la Universidad de Lima

Participamos en la XXVIII Feria del Trabajo de la Universidad de Lima, en donde invitamos a sus alumnos a interactuar con nuestros abogados para conocer más sobre nuestra cultura y las oportunidades de trabajo.)))

We participated in the XXVIII Job Fair at Universidad de Lima, where we invited their students to interact with our lawyers and learn more about our culture and job opportunities.)))



Logros Recientes

Logros recientes

Presentamos nuestros "Logros recientes", donde mostramos los principales encargos, casos o transacciones, entre otros, realizados por nuestro estudio para diferentes clientes.)))

We present our "Recent Achievements", where we show the main assignments, cases or transactions, among others, carried out by our firm for different clients.)))

Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú

T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑIZ

MUÑIZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chíncha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca